



INFORME

AMAZONÍA, HIDROCARBUROS Y PUEBLOS INDÍGENAS

UN ESTADO DE LA CUESTIÓN EN EL CASO PERUANO (2003 - 2008)

AUTOR

CÉSAR GAMBOA BALBÍN

DERECHO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

LIMA, MARZO 2009

AMAZONIA, HIDROCARBUROS Y PUEBLOS INDÍGENAS: UN ESTADO DE LA CUESTIÓN EN EL CASO PERUANO (2003-2008)

César Leonidas Gamboa Balbín (cgamboa@dar.org.pe)

Abogado y Candidato a Doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú)

Becario del Fondo Masaji Chiba, Instituto Internacional de Sociología Jurídica (2008-2009)

Estudiante del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales CEPC y del Instituto de Derechos Humanos Universidad de Complutense de Madrid

Índice

1. Antecedentes
2. Irregularidades normativas de superposición de lotes de hidrocarburos con áreas protegidas (2003-2008)
 - 2.1. Incongruencia constitucional de la política de hidrocarburos
 - 2.2. Incongruencia legal de la política de hidrocarburos
3. Posición crítica de la sociedad civil y recomendaciones de la defensoría del pueblo
4. Recientes Irregularidades: Licitación 2007 y 2008
 - 4.1. Irregularidades de oferta pública de lotes frente a la superposición con áreas protegidas
 - 4.2. Irregularidades de oferta pública de lotes frente a la superposición con las reservas territoriales
 - 4.3. Actos de Corrupción en el Proceso de Licitación 2008
5. Pueblos Indígenas Aislados e Hidrocarburos: Camisea como un Caso Emblemático
6. Soluciones Metalegales

Conclusiones

Bibliografía

Siglas

Resumen

Actualmente se está viviendo en América Latina una política agresiva de promoción de las inversiones energéticas debido al alto precio de los combustibles y a la decreciente acumulación de reservas de hidrocarburos a nivel mundial. Ello ha posibilitado que se vea a la Amazonía como una opción donde explorar y explotar estos recursos no renovables sin

considerar criterios éticos, de derechos humanos, técnico biológicos y legales en espacios de conservación de especies y protección de derechos que podría traer graves consecuencias sociales en nuestros países. En el caso del Perú, desde el 2003, el Estado no ha tenido consideración al implementar una política incoherente de promoción de las inversiones de hidrocarburos en la Amazonía peruana, el establecer lotes de hidrocarburos a ámbitos de conservación como áreas protegidas, territorios indígenas, derechos preexistentes y otros ámbitos de protección como las reservas territoriales para pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial. Esta ponencia busca presentar un estado de la cuestión sobre estos conflictos entre espacios de conservación/protección y aprovechamiento hidrocarburífero en la Amazonía, sus posibles impactos, así como las posibles soluciones para encontrar una “governabilidad energética”, política coherente y sostenible de hidrocarburos que beneficie al inversionista, a los pueblos indígenas (comunidades y pueblos indígenas aislados) y a las futuras generaciones de nuestros países.

Palabras Clave: exploración y explotación de hidrocarburos / amazonía peruana / superposición de lotes / reservas territoriales / áreas protegidas

Abstract

Actually, an aggressive policy is being lived in Latin America on promotion of the energetic investments because of the high price on fuels and to the decreasing accumulation of reserves on oil and gas at world level. It has made possible that is seen the amazon region like an option where explore and operate these nonrenewable resources without considering ethical, biological and human rights standards, for example, technician issues in spaces of conservation of species and protection of rights that could bring serious social consequences in Andes and Amazon countries. In the case of Peru, since 2003, the Peruvian government has not had consideration to implement a incoherent policy of promotion of oil and gas foreign investments in the Peruvian Amazon, affecting the establishment many zones of conservation of biodiversity like protected areas, indigenous lands, rights preexisting and other zones of protection like the territorial reserves for indigenous people on isolation and initial contact. This article looks for to introduce the situation on these conflicts between conservation and protection zones and possible

impacts oil and gas activities in the Amazon region, as well as the possible solutions to find a “energetic governance”, coherent and sustainable policy of oil and gas that benefit the investor, to the indigenous people (isolated indigenous and/or indigenous communities) and to the future generations of our countries.

Keywords: gas and oil exploration and production / Peruvian Amazon / overlapping blocks / territorial reserves / protected areas

1. ANTECEDENTES

Debemos tener en cuenta que la definición de áreas protegidas está engarzada bajo el concepto de desarrollo sostenible y que no necesariamente significa un límite irrestricto al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales o a las industrias extractivas.¹ Es más en el caso del Perú, la regulación de áreas protegidas ha señalado como una de sus finalidades la contribución que pueda hacer al desarrollo nacional.²

Entonces, estos espacios naturales especiales, valorados por la sociedad, que brindan bienes (fauna silvestre y pesca, flora silvestre) y servicios (mantenimiento de la biodiversidad, provisión de agua, conservación de cuencas, captura de carbono, recreación y disfrute de la naturaleza), cuyo objetivo principal -entre los múltiples que tiene el manejo de estas áreas protegidas- es el conservar la diversidad biológica,³ el cual no puede estar desligado al desarrollo sostenible como “aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.⁴

Como hemos señalado anteriormente (Gamboa 2008a, p. 3), después del desarrollo del emblemático y complejo proyecto de gas de Camisea, la política del Estado Peruano ha buscado intensificar la promoción de actividades extractivas en los Andes y la Amazonía

¹ IV Congreso Mundial de Parques Nacionales y Otras Áreas Naturales Protegidas de la UICN (Caracas, 1992): “Áreas Protegida es una superficie de tierra o mar especialmente consagrada a la protección y al mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y recursos culturales asociados, y que es manejada por medios jurídicos u otros medios eficaces”.

² Ley N° 26839 sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica (1997) y Ley N° 26834 de Áreas Naturales Protegidas.

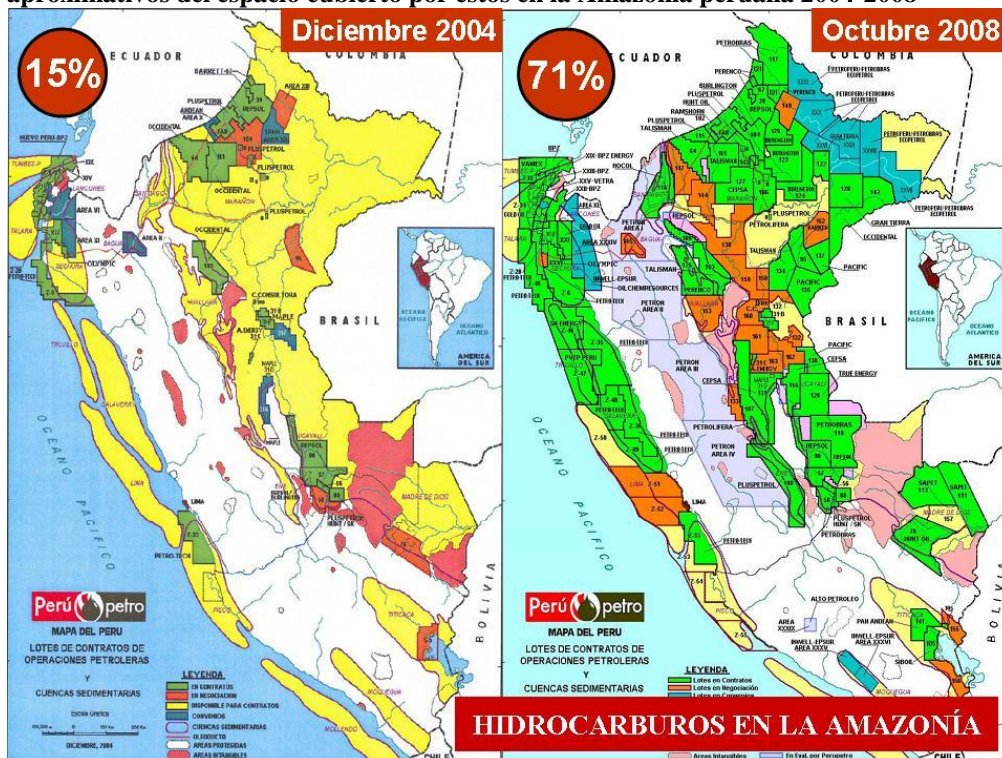
³ “Estrategia Mundial para la Conservación”, 1980.

⁴ “Informe de la Comisión Bruntland”, 1987.

peruana, a través del llamado proceso de “shock de inversiones”, en áreas desatendidas históricamente por el Estado. Sin embargo, los conflictos sociales y ambientales generados por este tipo de promoción de las inversiones nos llevan a sugerir la necesidad de solucionar pronta y oportunamente el conflicto jurídico generado por la actual política energética que no incluye, por ejemplo, los principios de conservación de la biodiversidad ni el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, ya estén en comunidades campesinas y nativas, o se encuentren en aislamiento y en contacto inicial de la amazonía peruana.

Según nuestros estudios (Gamboa et al. 2008a, y 2008b), a causa de una falta de planificación energética y la primacía de los intereses corporativos, de los 78 millones de hectáreas que representan la amazonía peruana de toda la cuenca amazónica, casi 55 millones de hectáreas tienen lotes de hidrocarburos en menos de cuatro años. En los últimos 5 años (2003-2008),⁵ el 71% de la amazonía peruana ha sido lotizado a través de una incoherente e irresponsable política de inversión de hidrocarburos.

Mapas comparativos de aumento de lotes de hidrocarburos en el Perú con agregados de porcentajes aproximativos del espacio cubierto por estos en la Amazonía peruana 2004-2008



Elaboración del autor. Fuente: <http://www.perupetro.com.pe> [31-01-2006 y 10-11-2008]

⁵ Datos recogidos por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana IIAP y el Instituto del Bien Común IBC, 2007. <http://www.ibcperu.org.pe> [consulta 30-04-2007]. Posteriormente actualizado por el Colectivo Área Protegida e Hidrocarburos, ver http://www.dar.org.pe/hidrocarburos/colectivo_area_protegidaeh.pdf [01-11-2008].

En Perú, los lotes otorgados mediante proceso de licitación pública en el año 2007 y 2008 se superponen con dos áreas protegidas y una reserva territorial para pueblos indígenas aislados. Estos últimos lotes se suman al número de lotes irregularmente superpuestos a áreas protegidas y que vulneran los derechos de los pueblos indígenas, aumentando el porcentaje de lotes otorgados en la amazonía y con ello, los posibles impactos socioambientales a ámbitos regionales de conservación de la biodiversidad tan importantes para la seguridad alimentaria y de diversidad biológica de las futuras generaciones de peruanos (WWF et al. 2007, p. 5).

Sumado al problema de incoherencia de la política pública hidrocarburífera y los posibles conflictos socioambientales -hay cerca 47 lotes de hidrocarburos sobre cientos de comunidades nativas-, existe también una grave amenaza a los derechos humanos de los pueblos indígenas aislados.

En consecuencia, podemos encontrar que los componentes de la sostenibilidad con que deben contar las industrias extractivas, especialmente la explotación de hidrocarburos, han sido afectados por el desequilibrio causado por una lotización irracional de la amazonía peruana, sin considerar un consenso local, regional o nacional de actores, ni el marco constitucional y legal vigente, los posibles impactos a los ecosistemas y a la forma de vida de los pueblos indígenas, ya sean contactados o no.

2. IRREGULARIDADES NORMATIVAS DE SUPERPOSICIÓN DE LOTES DE HIDROCARBUROS CON ÁREAS PROTEGIDAS (2003-2008)

Si bien es cierto que no todas las superposiciones de lotes provienen de un proceso de otorgamiento irregular –lotes de hidrocarburos que son otorgados a empresas antes que se establezca el área protegida-, las irregularidades que se contemplan en la presente investigación corresponden a problemas que se producen como efecto del incumplimiento del marco legal cuando se produce la superposición de lotes después de la creación de áreas protegidas o reservas territoriales sin realizarse previamente el estudio de compatibilidad.

Actualmente, en todo el territorio nacional, existen cerca de 60 lotes de hidrocarburos otorgados a empresas⁶ -próximamente aumentaran a 80 lotes-, y de manera irregular se han otorgado contratos de licencia de exploración y explotación⁷ de 15 lotes encontrándose superpuestos a 12 áreas protegidas.

Cuadro 1. Listado de superposición de lotes de hidrocarburos con áreas protegidas de forma irregular hasta Noviembre 2008

Empresa Titular / Operador	Lotes en la Amazonía / Fecha	Departamento / Región	Áreas Naturales Protegidas / Fecha de Creación
Repsol YPF (Consortio)	57 (2003)	Cusco	Reserva Comunal Matsiguenga (2003)
Petrobrás	58 (2005)	Cusco	Reserva Comunal Matsiguenga (2003)
Hunt Oil / Repsol YPF	76 (2005)	Madre de Dios	Reserva Comunal Amaraeri (2002)
Burlington	104 (2005)	Loreto	Zona Reservada Pucacuro (2005)
Petrolifera	107 (2005)	Huanuco	Reserva Comunal Yanesha (1988) / B. P. San Matias San Carlos (1987)
Pluspetrol	108 (2005)	Junín, Pasco, Ayacucho	Reserva Comunal Ashaninka (2003) / B. P. San Matias San Carlos (1987)
Sapet	111 (2005)	Madre de Dios	Reserva Nacional Tambopata (2000)
CEPSA	114 (2006)	Ucayali	Reserva Comunal El Sira (2001)
Hocol	116 (2006)	Amazonas	Zona Reservada Santiago Comaina (1999)
Petrobrás	117 (2006)	Loreto	Zona Reservada Güepi (1997)
Perenco	125 (2006)	San Martín	Bosque de Protección Altomayo (1987)
Burlington	129 (2007)	Ucayali	Zona Reservada Pucacuro (2005)
CEPSA	131 (2007)	Ucayali	Reserva Comunal El Sira (2001)
Pacific Stratus	135 (2007)	Ucayali/Loreto	Zona Reservada Sierra del Divisor (2006)
Pacific Stratus (Consortio)	138 (2007)	Ucayali	Zona Reservada Sierra del Divisor (2006)
Total	15 Lotes	10 Departamentos	12 Áreas Protegidas

Elaboración del autor. Fuente: <http://www.perupetro.com.pe>; <http://www.inrena.gob.pe> [10-11-2008]

⁶ <http://www.perupetro.com.pe>; <http://www.minem.gob.pe> [10-11-2008].

⁷ Debemos señalar que los contratos de licencia de exploración y explotación de hidrocarburos se inician con las actividades de exploración o prospección (especialmente actividades de sísmica o perforación de pozos) y puede durar entre 7 a 10 años. Si se descubre hidrocarburos (gas, petróleo) y es viable comercial y técnicamente su explotación, se inicia la fase de implementación de la producción, transporte y distribución que puede durar entre 30 a 50 años. Todos estos contratos señalados en el cuadro 1 han iniciado actividades de exploración con el programa mínimo de trabajo de 7 años.

2.1. INCONGRUENCIA CONSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA DE HIDROCARBUROS

Por otro lado, el marco constitucional señala el contenido de las políticas públicas referidas a la conservación de la biodiversidad mediante áreas protegidas. La Constitución de Perú de 1993 señala que el Estado “promueve el uso sostenible de sus recursos naturales” (art. 67), estando “obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas” (art. 68).

Más aun, estas disposiciones constitucionales deben interpretarse de acuerdo a lo señalado en el Convenio de Diversidad Biológica;⁸ en cuanto a la conservación de la naturaleza a través de áreas protegidas, el Estado peruano deberá elaborar “directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica” (art. 8, lit. b).

En consecuencia, el Ministerio de Energía y Minas MINEM y Perupetro S.A.⁹ han vulnerado el orden constitucional al suscribir contratos de estos lotes superpuestos a áreas protegidas puesto que los artículos 67 y 68 de la Constitución son desarrollados por los principios, instituciones, procedimientos y normas del “Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SINANPE”, el cual ha sido vulnerado mediante la suscripción y aprobación de esos contratos, sin ser tomado en cuenta en ningún momento el procedimiento de otorgamiento de lotes en áreas protegidas que señala esta legislación.

En una sentencia el Tribunal Constitucional ha consagrado el “derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida” –principio de la “Constitución Ecológica”–, mediante los principios de prevención, que “supone resguardar los bienes ambientales de cualquier peligro que pueda afectar su existencia”, el cual se materializa en la obligación del Estado “a ejecutar acciones y adoptar medidas técnicas que tengan como fin evaluar los posibles daños que se pueda ocasionar al medio ambiente”,¹⁰ considerando una “realidad ecológica”. Entre esas medidas técnicas, encontramos el

⁸ Aprobado mediante Resolución Legislativa N° 26181 de 30 de abril de 1993. Entró en vigor para el Perú el 07 de septiembre de 1993.

⁹ Perupetro S.A. es una empresa estatal de régimen privado, con plena autonomía para negociar contratos de licencias de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio y litoral peruano.

¹⁰ Sentencia del TCP 20-04-2007 (Exp. N° 1206-2005-PA/TC), fundamento 10; ver también Canosa 2004, p. 225. Ver también la reciente Sentencia del TCP 20-04-2007 (Exp. N° 03610-2008-PA/TC), fundamentos 25-35.

estudio previo de compatibilidad de las actividades de hidrocarburos a realizarse en áreas protegidas.

2.2. INCONGRUENCIA LEGAL DE LA POLÍTICA DE HIDROCARBUROS

Uno de los requisitos de la legislación de áreas protegidas es la realización de un estudio de compatibilidad (jurídico y biológico) previo al otorgamiento del derecho (hidrocarburífero) para que la autoridad competente (Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA) deba pronunciarse si es posible realizar actividades extractivas dentro de las áreas protegidas, según su categoría, zonificación, plan maestro del área protegida y objetivos del área. En ese sentido, el art. 27 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N° 26834) señala este requisito previo para el otorgamiento del derecho hidrocarburífero, entendiéndose que el “aprovechamiento de recursos no debe perjudicar el cumplimiento de los fines para los cuales se ha establecido el área”.

Tal como hemos señalado (Gamboa 2008c, p. 222), para realizar la actividad de hidrocarburos en áreas protegidas, se debe contar previamente con un estudio que evalúe la compatibilidad de la actividad hidrocarburífera con los fines de un área protegida. Los criterios técnicos-normativos y los biológicos para compatibilizar la actividad de hidrocarburos dependen de la categoría del área protegida; la zonificación asignada por el Plan Maestro; el Plan Maestro como un instrumento de planificación y como conjunto normativo de disposiciones que permiten o no actividades; y los objetivos y fines del área protegida. Este último criterio es el más importante, por cuanto le otorga al INRENA una discrecionalidad para aplicar los principios de la conservación de la biodiversidad así como interpretar una necesaria protección estricta en un área protegida y considerar el impacto y amenazas de las actividades hidrocarburíferas que solicitan autorización.

En Ghersi et. al. (2006) y Carhuatocto (2007) se establece con mayor precisión el contenido de los criterios anteriormente señalados, guiados por los principios biológicos, normativos y político-administrativos que ayudan a determinar la compatibilidad de las actividades hidrocarburíferas en un área protegida de “uso directo”:¹¹ Singularidad y

¹¹ La legislación peruana ha dividido las distintas categorías de áreas protegidas establecidas por ley en dos grupos, las áreas protegidas de uso indirecto, que gozan de mayor protección al no permitirse

fragilidad del ecosistema que se pretende proteger con el área protegida; valor social e interés nacional que encierra el área protegida; factibilidad de asegurar el manejo sostenible del área protegida; y viabilidad de actividades económicas sostenibles preexistentes.

El reglamento de la ley de áreas protegidas (Decreto Supremo N° 038-2001-AG) abunda más y señala un procedimiento operativo de la actividad extractiva en estas áreas. Con la suscripción de los contratos entre Perupetro S.A. y las trece empresas que tienen lotes superpuestos en doce áreas protegidas, se ha incumplido con un estudio de compatibilidad para determinar si es posible realizar en el área protegida actividades hidrocarburíferas; la coordinación intersectorial entre la autoridad sectorial de energía y el INRENA; y la autorización respectiva del INRENA para permitir el otorgamiento del lote superpuesto a áreas protegidas.

En ese sentido, el art. 116° del reglamento sentencia el contenido de la vulneración normativa: en los procedimientos para operaciones de hidrocarburos, la “autoridad sectorial competente debe coordinar previamente con el INRENA, para definir la compatibilidad de la actividad con la naturaleza jurídica y condiciones naturales del área involucrada”, y si se aceptara la actividad, se debe buscar realizar las mejores prácticas en dicha áreas.

Estos procedimientos no sólo contemplan la necesidad del estudio previo a la propia actividad de explotación en sí, sino a toda aquella relacionada a la actividad extractiva, tal como se desprende de la legislación sobre conservación de la biodiversidad. En ese sentido, tanto la legislación de áreas protegidas como de la interpretación de normas en dicha materia precisan una coordinación permanente entre sectores, la realización de un estudio de compatibilidad y una autorización manifiesta del INRENA para permitir actividades de hidrocarburos en áreas protegidas, previa a la suscripción de los contratos.

actividades extractivas (parques nacionales, santuarios históricos y nacionales); y las áreas protegidas de uso indirecto, en las cuales se pueden realizar actividades extractivas después de cumplir un procedimiento establecido en la legislación especial (reservas nacionales, reservas comunales, bosques de protección). Sin embargo, en el año 2007, el gremio de empresarios en hidrocarburos y el sector estatal de energía intentaron impulsar un proyecto de ley permitir actividad de explotación de gas en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, el cual alberga a la zona Candamo un ecosistema único y megadiverso en la amazonia compartida entre Perú y Bolivia. Ver <http://www.observaperu.com> [10-11-2008].

En otras normas de mayor relevancia en el ordenamiento jurídico¹², se menciona que no sólo debe entenderse la necesidad de realizarse el estudio de compatibilidad previo a las actividades estrictamente de aprovechamiento del recurso, sino a toda la actividad relacionada a ella, es decir, el estudio de compatibilidad debe ser evidentemente previo a las actividades de exploración de hidrocarburos, previo a la suscripción de los contratos.

3. POSICIÓN CRÍTICA DE LA SOCIEDAD CIVIL Y RECOMENDACIONES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

A partir del pronunciamiento de organizaciones indígenas y ambientalistas,¹³ la Defensoría del Pueblo inició una investigación de oficio sobre la superposición de lotes que finalizó con el “Informe de Defensoría del Pueblo N° 009-2007-DP/ASPMA.CN, Superposición de Lotes de Hidrocarburos con Áreas Naturales Protegidas y Reservas Territoriales en la Amazonía Peruana” (20 de marzo de 2007), arrojando como recomendaciones finales la obligación del Estado en respetar y adecuar sus prácticas a la legislación de áreas protegidas y al respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas aislados.¹⁴

En el caso de la superposición de lotes con áreas protegidas, señala el Informe Defensorial, la suscripción de los contratos de hidrocarburos entre las empresas petroleras y Perupetro S.A. que involucre espacios que se superponen a áreas protegidas de uso directo y sus zonas de amortiguamiento sin la opinión técnica favorable del INRENA, condiciona la evaluación de compatibilidad que el INRENA debería realizar antes de la suscripción del contrato, poniendo en riesgo los fines del SINANPE y perjudicando los derechos del inversor en estas actividades; y, si después el INRENA opina desfavorablemente a través del estudio de compatibilidad, los derechos otorgados a los particulares podrían ser desconocidos, lo que implica poner en cuestión la credibilidad del Estado peruano, afectando la seguridad jurídica que supuestamente gozan los derechos de terceros y la política de promoción de las inversiones en actividades hidrocarburíferas.

¹² En el art. 13° de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley N° 26821), así como el art. 22° de la Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica (Ley N° 26839).

¹³ Cerca de 30 organizaciones suscribieron el “Pronunciamiento sobre la superposición de lotes de hidrocarburos con reservas territoriales y áreas naturales protegidas”, *La República (Lima)*, 01-02-2007.

¹⁴ Ver referencia teórica e histórica en Gamboa 2008b, p. 387-9.

En consecuencia, la recomendación defensorial es la abstención estatal de otorgar derechos a las empresas para realizar actividades hidrocarburíferas que amenacen la diversidad biológica y a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (recomendaciones 3 y 4). Estas recomendaciones no son, propiamente, vinculantes; sin embargo, señalan una salida para solucionar el conflicto jurídico y social causado por las superposiciones de lotes. La Defensoría recomienda al MINEM y a Perupetro S.A., que cumpla con la legislación de áreas protegidas, solicitando la opinión técnica al INRENA para los lotes licitados en los años 2007 y 2008, y los futuros que se superpongan a áreas protegidas.

4. RECIENTES IRREGULARIDADES: LICITACIÓN 2007 Y 2008

4.1. IRREGULARIDADES DE OFERTA PÚBLICA DE LOTES FRENTE A LA SUPERPOSICIÓN CON ÁREAS PROTEGIDAS

Los años 2007 y 2008, Perupetro S.A., la empresa estatal encargada de negociar los lotes de hidrocarburos con las empresas privadas, inició licitaciones públicas de cerca de 40 lotes en una oferta pública internacional que duraría más de veinte meses.¹⁵ En ambos casos, los resultados de la adjudicación de los lotes no cubrieron las expectativas estatales puesto que se adjudicaron algunos lotes y las empresas ganadoras en la licitación son consideradas de “junior” en el ámbito del gas y el petróleo a nivel mundial.

Sin embargo, algunos de estas oferta de lotes se encontraban superpuestos a 2 áreas protegidas de suma importancia social y biológica: La Reserva Comunal El Sira; y, la Zona Reservada Sierra del Divisor en el año 2007 y en el año 2008, respectivamente; igualmente ocurría con la oferta de lote 147 superpuesta a la Zona Reservada Santiago Comaina.¹⁶ Un ejemplo de ello era la superposición de tres lotes sobre la ZR Sierra del Divisor, según un estudio reciente (Vriesendorp 2006), un área protegida que contiene formaciones geológicas de millones de años de antigüedad y que conforman la única cadena montañosa

¹⁵ <http://www.perupetro.com.pe> [30-06-2007].

¹⁶ Este análisis se desprende de las Bases del Proceso de Selección N° Perupetro-CONT-001-2007 de enero 2007; se muestran las coordenadas UTM de cada lote que se superpone con las áreas protegidas RC El Sira y la ZR Sierra del Divisor. <http://mirror.perupetro.com.pe/promocion2007/inicio.htm> [30-01-2007]. De igual manera sucede este año con la superposición del lote 147 con la ZR Santiago Comaina [http://mirror.perupetro.com.pe/downloads/ANEXO A.pdf](http://mirror.perupetro.com.pe/downloads/ANEXO_A.pdf) [30-01-2007].

del llano amazónico, albergando especies endémicas de flora y fauna, que urge una protección y conservación especial.

Vale precisar que las zonas reservadas son áreas protegidas de categoría transitoria, hasta definirse una categoría final, ya sea de uso directo, donde se permiten aprovechar recursos, o de uso indirecto, donde no se permite. Mientras tanto, según la normatividad nacional peruana, gozan de la mayor protección posible, bajo la aplicación del principio precautorio¹⁷.

4.2. IRREGULARIDADES DE OFERTA PÚBLICA DE LOTES FRENTE A LA SUPERPOSICIÓN CON LAS RESERVAS TERRITORIALES

Un caso particular también ha sido las graves amenazas de las actividades de hidrocarburos que se ciernen contra los pueblos indígenas aislados. Además del aumento de la frontera agrícola, la colonización de la amazonía, la tala ilegal de la madera, el narcotráfico, las actividades de hidrocarburos se suman a las amenazas que deberán enfrentar estos pueblos. Si bien la legislación nacional permite el desarrollo de las actividades extractivas en las zonas donde habitan estos pueblos,¹⁸ los principios de protección desarrollados en el ámbito internacional,¹⁹ en la legislación comparada,²⁰ y en la doctrina jurídica (Parellada 2007; Santillán et al. 2007b), han señalado que las áreas reconocidas legalmente para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial deben ser intangibles y no permitirse ningún tipo de actividad foránea hasta que ellos decidan contactarse con la sociedad nacional.

Entonces, la superposición de lotes de hidrocarburos sobre reservas territoriales a favor de los pueblos indígenas aislados pondría en grave amenaza los derechos humanos de estos

¹⁷ Según los arts. 13° de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas y el artículo 115° del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, este último establece que “en aplicación del principio precautorio, el INRENA puede determinar que no es posible realizar actividades relacionadas a explotación de recursos naturales no renovables hasta su categorización final”.

¹⁸ Segunda Disposición Transitoria del Decreto Ley N° 22175; art. 5°, literal c) de la Ley N° 28736, Ley de Protección Especial a favor de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial, 2006. Ver Santillán et al. 2007a.

¹⁹ La Declaración de UICN de 2004, la Declaración de Belém de 2005 y el Llamamiento de Santa Cruz de 2006.

²⁰ Las zonas de protección etnoambiental en Brasil; la zona de reserva absoluta Toromona en Bolivia y la zona intangible Tagaeri Taromenane en Ecuador.

pueblos. Además, el proceso de otorgamiento de lotes se encuentra reñido con el artículo 1 de la Constitución de 1993, el cual señala que la “defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”, y con diversos tratados internacionales de derechos humanos. Ello acarrearía sanciones internacionales para el Estado en el sistema interamericano de derechos humanos.²¹

Cuadro 2. Listado de superposición de lotes de hidrocarburos con reservas territoriales para pueblos indígenas aislados de forma irregular hasta noviembre de 2008

Empresa Titular / Operador	Lotes en la Amazonía	Departamento / Región	Reservas Territoriales para Pueblos Indígenas Aislados
Pluspetrol, Hunt Oil, Sk Corp	88	Cusco	Kugapakori, Nahua
Petrobrás	110	Ucayali	Murunahua
Sapet	113	Madre de Dios	Madre de Dios
Pacific Stratus	138	Ucayali	Isconahua
Total	04 Lotes	03 Departamentos	04 Reservas Territoriales

Elaboración del autor. Fuente: <http://www.perupetro.com.pe> [consulta 10-11-2008]

Por la presión internacional y nacional ejercida por las organizaciones indígenas, ONGs²² y la Defensoría del Pueblo²³, Perupetro S.A. y el MINEM se abstuvieron a seguir ofreciendo lotes de hidrocarburos superpuestos a reservas territoriales el 2008. De hecho, esto se debe más a una cuestión impostada que a un real convencimiento estatal de la importancia de mantener en intangibilidad las zonas donde habitan pueblos indígenas aislados, puesto que hay zonas donde ellos viven y que aun no han sido declaradas como reservas, y donde el Estado peruano ya ha otorgado lotes (propuestas de reservas territoriales Cashibo Cacataibo o Napo Tigre).

²¹ En Cueto et al. 2008, p. 43-7, podemos encontrar que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDSESEP interpuso dos solicitudes de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano por la superposición de lotes sobre la reserva territorial Kugapakori (Lote 88 de Pluspetrol) y propuesta de reserva Napo Tigre (Lotes 67 de Barrett y 39 de Repsol YPF). La primera solicitud ha seguido un proceso de audiencias e informes de partes durante el 2008.

²² Comunicado del Colectivo de organizaciones de la sociedad civil área protegida - Hidrocarburos, “Por una Política de Inversión Informada e Inclusiva. El MINEM y Perupetro S.A. deben detener las políticas de inversión que atentan contra la Conservación de la Biodiversidad y los Derechos Humanos”, *La República (Lima)*, 19-04-2007, p. 5.

²³ La Defensoría del Pueblo señaló que el Estado debe abstenerse de otorgar derechos a particulares que posibiliten actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que pongan en peligro los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Informe de Defensoría citado, Conclusión 8.

Con respecto a los compromisos asumidos entre el MINEM y las organizaciones indígenas, el 05 de febrero de 2007 se suscribió el Acta²⁴ en la cual el Estado se compromete a reducir los lotes que se superponen con las reservas territoriales Isconahua, Murunahua y de Madre de Dios en el proceso de licitación pública de lotes 2007. Hasta la fecha, Perupetro S.A. y el MINEM no han realizado ningún tipo de acto administrativo o normativo para asegurar en un futuro dar “a conocer las modificaciones del área de los lotes para evitar superposiciones con las reservas territoriales, declaradas así oficialmente por el Estado”.²⁵

Es importante resaltar que tampoco ha sido una voluntad del Estado Peruano reducir la oferta de lotes el 2007 y no superponer ninguna oferta el 2008. Algunos lotes que tenían grandes áreas superpuestas a reservas territoriales, no tuvieron ofertas de empresas puesto que las organizaciones indígenas enviaron comunicaciones a muchas empresas para que no postularan por dichos lotes, lo que desincentivó la oferta el 2007 y este año, el Estado Peruano decidió no ofrecer lotes sobre reservas territoriales, pese a su anuncio inicial.²⁶

4.3. ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 2008

El año 2008 ha sido aún más intenso en la escala de complejidad de los conflictos socio ambientales en la amazonia peruana. Después que el gobierno peruano implementó un nuevo marco legal –a la luz del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos– que promueve las inversiones en los andes y en la amazonia peruana, se produjo el denominado “Paro Amazónico”, protesta de pueblos indígenas amazónicos, que terminó en la derogación de algunas normas, exigencia indígena de la implementación del derecho a la consulta y en un proceso de dialogo que aún no acaba. Ciertamente, el gremio empresarial y los sectores estatales encargados de la promoción de las inversiones han cuestionado los cambios normativos que aseguran los derechos de estos pueblos.

Bajo este marco de hechos, a inicios de octubre, por una investigación periodística, se llegar a conoce que funcionarios estatales habían favorecido a una empresa noruega

²⁴ El acta fue suscrita entre el MINEM, Perupetro S.A., Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Agricultura, INDEPA y las organizaciones indígenas AIDSESEP y CONAP.

²⁵ Párrafo del Acta de 05-02-2007.

²⁶ <http://www.andina.com.pe/NoticiaDetalle.aspx?id=135845> [14-07-2007].

(Discover Petroleum S.A.) en la reciente concluida licitación pública de oferta de lotes en la amazonia y litoral peruano. En esta, esta empresa noruega había adquirido 5 lotes (1 en la amazonia y otros 4 en el litoral norte del Perú), a través de coordinaciones con un funcionario de la empresa estatal Perupetro S.A., encargada del proceso de licitación, demostrando una vez más, la poca transparencia y enrarecida gestión en la promoción de actividades de hidrocarburos en el país²⁷.

5. PUEBLOS INDÍGENAS AISLADOS E HIDROCARBUROS: CAMISEA COMO UN CASO EMBLEMÁTICO

Antecedente y caso emblemático de toda la situación sobreviniente de la política de promoción de hidrocarburos en la amazonia peruana (2003-2008) es el caso del proyecto de extracción de gas de Camisea (lotes 88 y 56 de Pluspetrol), situación en la amazonia, rodeado de varias áreas protegidas y superpuesto a la reserva territorial para pueblos indígenas aislados Kugapakori, Nahua, Nanti y otros RTKN.

Cueto et al. (2008), señala que la organización indígena AIDSESEP presentó el año 2007 una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la defensa de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la reserva territorial Kugapakori frente a la poca acción de protección estatal, se ha tomado en cuenta la gravitante importancia del Proyecto del gas de Camisea por cuanto los impactos directos e indirectos de este proyecto hidrocarburífero han marcado tanto los derechos de estos pueblos, en las políticas públicas y los marcos legales nacionales sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas aislados de la amazonía peruana.

Por lo pronto, quedará claro que el Proyecto Camisea (2000) fue una oportunidad perdida para cambiar y mejorar los estándares sociales y ambientales de este tipo de mega proyectos. Se consideró en un primer momento que el Estado asumiría de manera coherente y transparente la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial y construiría una serie de mecanismos normativos, procedimentales e institucionales para cumplir dicho objetivo, sin embargo, ello no se ha realizado de manera

²⁷ Han sido involucrados en estos actos de corrupción, además de 3 ministros de Estado, el propio Presidente de la República, Alan García, todo ello en materia de investigación judicial y política hasta el momento. Entre otras notas: <http://www.larepublica.com.pe/content/view/248184/483/> [10-11-2008].

perfecta ni oportuna. Esto se puede apreciar con el poco interés que se le mostró a la gestión de la inoperante e inestable del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuano INDEPA (2005), con su absorción al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social MIMDES, con la reducida autonomía brindada a la Dirección General de los Pueblos Originarios y Afroperuano de dicho ministerio durante el año 2007, y con su lenta restitución de su autonomía pero como un organismo técnico especializado adscrito al mencionado ministerio.

Otro elemento de análisis que gravitó para una mejor protección de los pueblos indígenas aislados que viven en la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua Nanti fue los pocos avances legales en su protección. La falta de implementación de instrumentos internacionales y tratados de derechos humanos, el poco interés por respetar políticas públicas e instrumentos de planificación en la protección sobre derechos de los pueblos indígenas en anteriores gobiernos y las pocas virtudes y muchos vicios de la Ley N° 28736 y su Reglamento (Decreto Supremo N° 008-2007-MIMDES), ponen en cuestionamiento y en serio peligro a los pueblos indígenas aislados.

Contraviniendo el art. 18 del Convenio N° 169 de la OIT,²⁸ el cual señala que deben ser sancionados por el Estado los que ingresen a los territorios de los pueblos indígenas, el Estado Peruano ha señalado en la Ley N° 28736, en el literal c) del artículo 5°, la posibilidad de realizar actividades extractivas en las reservas indígenas:

“Artículo 5°.- Carácter intangible de las reservas indígenas

Las reservas indígenas para los pueblos indígenas en situación de aislamiento o de contacto inicial son intangibles en tanto mantengan la calidad de tales. En ellas: (...);

c) No se otorgarán derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales, salvo el que con fines de subsistencia realicen los pueblos que las habiten y aquellos que permitan su aprovechamiento mediante métodos que no afecten los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, y siempre que lo permita el correspondiente estudio ambiental. En

²⁸ “Artículo 18°.- La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones”.

caso de ubicarse un recurso natural susceptible de aprovechamiento cuya explotación resulte de necesidad pública para el Estado, se procederá de acuerdo a ley; y, (...)”.

Con esta disposición, se retrocede y desconoce los compromisos asumidos en tratados internacionales, en instrumentos de planificación y en acuerdos con las organizaciones indígenas, como es el proyecto de ley de la Comisión Especial del Poder Ejecutivo del 2005 –en la cual participaron organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDSESP y Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú CONAP y casi todos los sectores del Estado-, el cual alcanzó al Congreso, señalando la intangibilidad de las reservas territoriales (prohibición de asentamientos poblacionales, actividades culturales y aprovechamiento de recursos naturales en dichas áreas).²⁹

Dentro de este marco adverso a una protección efectiva a favor de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial, el Estado, por el interés de cumplir con compromisos con actores económicos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo BID, estableció una serie de indicadores de avances y retrocesos en la protección a favor de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la RTKN que no ha podido cumplir de manera fehaciente y clara, esto es el objetivo de implementar la intangibilidad de la RTNK. Tanto el Compromiso IV del Estado Peruano con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, dentro del Préstamo N° 1441 entre el banco y el Perú para mitigar los impactos ambientales y sociales del proyecto del gas de Camisea –en el cual se incluía la protección de la reserva territorial Kugapakori-, lo señalado en el Decreto Supremo N°

²⁹ Mediante el Oficio N° 078°-2005-PCM/DM-100 del 26 de abril de 2005, de la Presidencia del Consejo de Ministros alcanzó a la en ese entonces Comisión de Amazonía, Asuntos Indígenas y Afroperuanos del Congreso de la República la propuesta de “Ley para la Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario o Contacto Inicial”, elaborado por una Comisión Especial constituida mediante Decreto Supremo N° 024-2005-PCM, el cual propone la intangibilidad de los territorios para los pueblos indígenas aislados: “Artículo Propuesto. Características y condiciones de las Reservas Territoriales Indígenas. Las Reservas Territoriales Indígenas garantizan la integridad territorial, cultural, ecológica y económica de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario o contacto inicial, en tal sentido:

- a) No podrán establecerse asentamientos poblacionales distintos a los de los pueblos indígenas que habitan en su interior.
- b) Se prohíbe la realización de cualquier actividad distinta a la de los usos y costumbres de sus habitantes.
- c) Se prohíbe el otorgamiento de derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales, salvo el aprovechamiento con fines de subsistencia por parte de dichos pueblos.
- d) La totalidad de los pueblos indígenas al interior de una Reserva Territorial Indígena concurrirán como únicos beneficiarios mancomunados de la misma”.

028-2003-AG, la implementación del Plan de Protección de la reserva territorial Kugapakori, el interés por el cumplimiento con las recomendaciones de los Informes Defensoriales N° 101 y N° 103, son indicadores en un proceso de varios años en el cual Estado no ha podido cumplir con proteger la reserva desde lo formal como desde lo práctico. Tanto por el marco legal vigente como por la práctica, la reserva territorial no es protegida por el Estado Peruano, vulnerando los derechos de los pueblos indígenas aislados que ahí viven.

Si un claro ejemplo es el incumplimiento del art. 3° del Decreto Supremo N° 028-2003-AG, el cual señalaba que en la RTKN no podían realizarse más actividades de aprovechamiento de recursos naturales que la actualmente permitida –proyecto Camisea I, lote 88-, lo cierto es que ni el Estado ha implementado medidas de protección oportunas, y en la práctica tiene otros intereses, como es la promoción de las inversiones en hidrocarburos, como puede apreciarse en el mapa de Perupetro S.A. (febrero 2008), en el cual existen lotes de hidrocarburos alrededor de casi toda la reserva.

Es por ello que AIDSESEP, organización indígena nacional y defensora de los pueblos indígenas aislados, ha interpuesto en función al incumplimiento de las obligaciones del Estado Peruano en la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la RTKN, y la grave amenaza que se cierne sobre estos pueblos la solicitud de una Medida Cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en defensa de los pueblos indígenas aislados de la RTKN. De esta manera, se intenta hacer cumplir al Estado Peruano en mejorar la protección de la mencionada Reserva desde la adopción de políticas públicas más coherentes y que respeten el derecho a la vida de estos pueblos, así como sus condiciones de aislados mediante la consagración del principio de intangibilidad de la RTKN.

En ese sentido, ahora un INDEPA sin respaldo técnico –sin funcionarios expertos en la temática-, sin interés ni preocupación por la protección de la RTKN –no hay presupuesto para los próximos meses para proteger la RTKN-, nos demuestra, una vez más, que el Estado Peruano, aun ahora, no le interesa proteger a los pueblos indígenas aislados de nuestra amazonia.

Frente a esta lógica de incumplimiento estatal y confrontación entre actores, vale la pena mencionar que debemos desarrollar una agenda propositiva y de construcción de propuestas frente a la imperiosa necesidad de establecer mecanismos de protección a favor de los pueblos indígenas aislados. Tal como esta nuestra magra legislación y débil institucionalidad, es pues necesario la modificación de la Ley N° 28736 que asegure la intangibilidad de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua Nanti, así como de las demás reservas existentes.

Por otro lado, la re construcción de un organismos técnico en el INDEPA, que vigile la implementación del Plan de Protección de la mencionada Reserva, con financiamiento canalizado por la cooperación internacional, a través de procesos participativos, en los cuales se vean involucrados sectores del Estado, organizaciones indígenas y de la sociedad civil, por supuesto, el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual tiene la obligación moral frente a cualquier falta de protección de la reserva. La creación de un mecanismo de vigilancia del Plan de Protección y de una Veeduría Social Ambiental de la RTKN, sería un gran avance para detener la falta de protección de la RTKN, el incumplimiento de las normas internacionales y nacionales por parte del Estado Peruano, así como la responsabilidad del BID en continuar en el seguimiento al proceso de la RTKN.

Sigamos el ejemplo de Ecuador que el año 2008 ha comenzado a ejecutar el Plan de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane, a través de una oficina del Ministerio del Ambiente (Plan de Protección de los Pueblos Indígenas Aislados) y que, con algunos traspiés, está logrando lo que ni el Estado Peruano, ni el BID,³⁰ han podido lograr: protección real y efectiva de los pueblos indígenas aislados. Solo falta decisión política.

6. SOLUCIONES METALEGALES

La relación entre áreas protegidas y la industria extractiva tiene diversos lazos, entre los cuales encontramos la superposición de lotes, los impactos directos e indirectos de estas actividades como los más importantes.

³⁰ BID hizo un préstamo al Estado Peruano para cumplir hace cuatro años los 21 compromisos que asumió ante el BID de mejorar los estándares ambientales y sociales alrededor de la ejecución del Proyecto Camisea.

Una posible solución debe ir más allá de lo legal, teniéndolo como base de respeto y reglas de juego claras, iniciando un proceso de dialogo claro entre los diversos actores (Estado, la sociedad civil y empresas), sobre la bases de conceptos precisos, intereses identificados y un proceso que venza la desconfianza histórica entre estos actores. Tal como señala Suárez de Freitas (2007), es pues necesario vencer mitos, aclarar nociones, lograr compromisos de mejores prácticas sobre la base de una ética del consenso y de cooperación. Nuestras sociedades se encuentran con una espada de Damocles, pues nos encontramos ante una crisis financiera y energética mundial que nos obliga a aprovechar las oportunidades y beneficios económicos que pueden traer nuestros recursos naturales, sin embargo, esto no puede ser óbice para vulnerar derechos humanos de grupos vulnerables, el bienestar de futuras generaciones y una ineficiente gestión de la extracción de los recursos no renovables.

Por otro lado, es importante reconocer la historia y las malas experiencias de actividades extractivas y asumir ese pasivo social puesto que los conflictos socioambientales aun se viven por todos los actores, aun empresas no comprometidas en ello deben asumir su responsabilidad en exigir a otras mejorar el cumplimiento de altos estándares sociales y ambientales.

CONCLUSIONES

Una primera conclusión es la necesidad de armonizar la promoción de las inversiones sobre hidrocarburos en el país con los principios de derechos humanos y conservación de la biodiversidad. Esto pasa por el respeto mínimo de los estándares actuales, especialmente de la legislación de áreas protegidas y de los principios y acuerdos del sistema jurídico internacional a favor de la protección de los pueblos indígenas aislados.

Una segunda conclusión es superar la vulneración del marco constitucional y legal de conservación a través de áreas protegidas y protección de derechos de los pueblos indígenas mediante reservas territoriales. Para ello, el Estado debería iniciar procesos de coordinación intersectorial y la realización del estudio de compatibilidad para las actividades de hidrocarburos en áreas protegidas, definiendo los criterios de compatibilidad

jurídicos y biológicos. En el caso de los pueblos indígenas aislados, la implementación del principio de intangibilidad de las reservas territoriales debe comenzar con un estudio de línea base que responda a todas las necesidades de un sistema de protección integral.

Cabe acotar que las irregularidades ponen en riesgo la seguridad jurídica de la inversión en el país, no solo porque no se respeta el marco legal, sino también porque no se informa oportunamente al futuro titular del derecho la relación con otros derechos y otros sistemas jurídicos como el tema de la conservación de la biodiversidad y posibles conflictos socioambientales que la empresa deberá afrontar. De hecho, en nuestros países, es necesaria la inversión pública y privada para el aprovechamiento de los recursos naturales, pero esta debe ser sostenible, de acuerdo a los principios de conservación de la biodiversidad “in situ” y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

En consecuencia, la superposición de los lotes de hidrocarburos con áreas protegidas, reservas territoriales para pueblos indígenas aislados, tierras de pueblos indígenas contactados (comunidades campesinas o nativas), otros derechos pre existentes y ámbitos de conservación-protección, no hace más que evidente la ausencia de integración de las políticas de promoción de actividades energéticas de nuestro país con las políticas de conservación de la biodiversidad y protección de los derechos humanos asumidos por el Estado Peruano en el ámbito internacional y en su propia legislación nacional. Todo ello nos lleva a pensar en múltiples soluciones como es iniciar un proceso de diálogo entre el Estado, sociedad civil y empresas, lograr compromisos para mejorar prácticas sociales y ambientales de todos los actores, visualizar la satisfacción de intereses y dotar de seguridad jurídica y social a la sociedad en su conjunto. Un reciente avance de ello es la creación del Ministerio del Ambiente (2008) que mejore los niveles de coordinación entre las autoridades competentes, una necesidad de reformular la normatividad para una eficaz conservación y protección de nuestro patrimonio natural, cultural y humano. Aun un tema pendiente es el fortalecimiento de una institucionalidad estatal encargada de implementar políticas a favor de los pueblos indígenas en Perú.

BIBLIOGRAFÍA

Canosa, Raúl (2004): *Constitución y Medio Ambiente*, Lima: Jurista Editores.

- Carhuatocto, Henry (2007): “Estrategias de Conservación en Situ y Desarrollo Sostenible”, Lima, (*manuscrito en el archivo del autor*).
- Cueto, Vanessa et al. (2008): *Informe Especializado de las Obligaciones del Estado Peruano sobre la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros*, Lima: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDSESP.
- Gamboa, César (2008a): “Camisea and the World Bank: A lost opportunity to make things better”, en *Bretton Woods Update* 60, p. 3.
- _____ (2008b): “Pueblos Indígenas y Recursos Naturales en los Andes”, en R. Méndez-Silva coord., *Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Cultura y Sistema Jurídico Comparado*, t. II, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas Universidad Nacional Autónoma de México, p. 383-91.
- _____ (2008c): “(In)sostenibilidad de los Hidrocarburos en la Cuenca Amazónica Peruana”, en G. Fontaine y A. Puyana, eds., *La Guerra del Fuego. Políticas Petroleras y Crisis Energética en América Latina*, Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO / Ministerio de Cultura de Ecuador, p. 219-38.
- Gamboa, César et al. (2008a): *Informe de Análisis de los Contratos de Gas de Camisea: Lecciones Aprendidas sobre Como Negociar con Nuestros Recursos Naturales (Lotes 88 y 56)*, Lima: DAR.
- Gamboa, César et al. (2008b): *¿El Estado Peruano cumplió con Camisea? Diagnóstico Final sobre el Cumplimiento de los Compromisos del Perú en el Ámbito del Proyecto Camisea*, Lima: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales DAR.
- Gherzi, Fernando y Patricia Luna (2006): “Hidrocarburos y áreas naturales protegidas”, Lima: Plan director para áreas naturales protegidas del Perú (*manuscrito en el archivo del autor*).
- Suárez De Freitas, Gustavo (2007): “Áreas naturales protegidas e industrias extractivas. En búsqueda del equilibrio”, ponencia presentada en el IV Congreso Internacional de Legislación de Minería, Hidrocarburos y Electricidad, Lima. Trabajo disponible en: <http://www.indemipe.com/indemipe/index.html> [10/10/2007].
- Parellada, Alejandro (2007): *Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en la Amazonia y el Gran Chaco*, Lima: Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas IWGIA.

- Santillán, Asunta y César Gamboa (2007a): *Régimen Especial Transectorial de Protección a favor de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial*, Lima: DAR.
- Santillán, Asunta y César Gamboa eds. (2007b): *Hacia una Reglamentación de la Ley N° 28736, Régimen Especial Transectorial a favor de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial*, Lima, DAR.
- Vriesendorp, Corine et al. (2006): *Rapid Biological Inventories: 17. Sierra del Divisor*, Chicago: Field Museum.
- WWF et al. (2007): *Áreas Naturales Protegidas Perú*, Lima: World Wildlife Fund Inc. / The Nature Conservancy / Conservación Internacional.

SIGLAS

AIDSESP	Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CONAP	Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú
IBC	Instituto del Bien Común
IIAP	Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
INDEPA	Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano
INRENA	Instituto Nacional de Recursos Naturales
MIMDES	Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
MINEM	Ministerio de Energía y Minas
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONGs	Organizaciones No Gubernamentales
RT	Reserva Territorial
RTKN	Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y Otros
SINANPE	Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
UICN	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
UTM	Universal Transverse Mercator (siglas en ingles del Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator)
WWF	World Wildlife Fund. Inc.
ZR	Zona Reservada